

Reglas para una economía abierta

Dieter H. Wunder

Economista y profesor universitario



La polémica por el proyecto de cable submarino ha dejado al descubierto una discusión que el país ha evitado durante demasiado tiempo: ¿cómo evaluar la inversión extranjera cuando esta involucra infraestructura estratégica?

Durante décadas, el país ha construido su desarrollo económico sobre la base de una economía abierta al comercio y al capital extranjero. Esa estrategia ha sido exitosa. Pero el contexto global ha cambiado. Hoy infraestructuras como cables submarinos, redes de telecomunicaciones, centros de datos, puertos o sistemas eléctricos no solo tienen un valor económico.

En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y rivalidad entre grandes potencias, también tienen una dimensión estratégica creciente.

Chile no es el primer país que enfrenta este dilema. Australia vivió una discusión muy similar durante la última década. A medida que China se transformaba en su principal socio comercial —cerca del 40% de sus exportaciones— comenzaron a sur-

gir controversias sobre inversiones chinas en puertos, redes eléctricas y telecomunicaciones.

El intento de inversión de la estatal china Chinalco en el gigante minero Rio Tinto por 19,5 mil millones de dólares, que finalmente no prosperó, fue uno de los episodios que encendió ese debate.

La respuesta australiana fue ins-
 tructiva. El país no cerró su economía ni prohibió las inversiones chinas. En cambio, fortaleció su institucionalidad. Reforzó su sistema de revisión de inversiones extranjeras y desarrolló herramientas legales para evaluar proyectos considerando tanto criterios económicos como implicancias para la seguridad nacional. En otras palabras, creó instituciones para gestionar los riesgos que surgen en un mundo crecientemente interdependiente.

Chile no cuenta hoy con un mecanismo comparable. Las inversiones extranjeras se evalúan principalmente bajo criterios regulatorios sectoriales —ambientales, económicos o de libre competencia— pero sin un sistema for-

mal que analice de manera sistemática sus implicancias estratégicas.

El debate por el cable submarino ha puesto en evidencia esa ausencia institucional. En este caso, además, el proyecto involucra a China Mobile, una empresa controlada por el Estado chino. En un mundo donde el 95% del tráfico global de datos circula por cables

submarinos, la propiedad y operación de esa infraestructura difícilmente puede considerarse un asunto trivial.

El punto central, sin embargo, no debería ser un país específico. El desafío no consiste en

elegir entre China o Estados Unidos y Europa, ni en cerrar la puerta al capital extranjero. El verdadero desafío es institucional. Si Chile quiere seguir siendo una economía abierta —algo que ha sido, y seguirá siendo, clave para su desarrollo— necesita reglas claras para evaluar inversiones en sectores estratégicos. Sin esas reglas, cada nuevo proyecto —sea un cable submarino, un puerto o una red eléctrica— volverá a provocar exactamente la misma controversia.

“El debate sobre el cable submarino ha puesto en evidencia esa ausencia institucional”.